

BERTRAND HERVIEU (*)

Agricultura y territorio: nuevas orientaciones para la política agraria

En varias ocasiones, y casi siempre con carácter de urgencia, la agricultura europea ha sido objeto de decisiones graves destinadas a frenar el desarrollo de su volumen de producción. En 1988 se adoptaron las primeras medidas en materia de retirada de tierras; 1992 fue el año de la reforma de la política agrícola común. Afectado por estas medidas, el mundo rural parecía desconcertado, incapaz de concebir un proyecto que volviera a situar la agricultura en el centro de los grandes retos contemporáneos. En Francia, varias disposiciones legislativas han tratado de reavivar el fuego: el Parlamento adoptó en diciembre de 1988 la «Ley de adaptación agraria», proyecto iniciado por François Guillaume cuando entró en la rue Varenne en 1986 y cuya culminación correspondió a Henri Nallet durante su segundo mandato al frente del Ministerio de Agricultura. En 1995, Jean Puech presentó una «Ley de modernización agraria». Pero nada ha ocurrido, como si este sector estuviese asfixiado por su propio éxito, impidiéndole superar la gesta de la modernización de la agricultura francesa, de la que fue alma la generación de jóvenes campesinos formados antes y después de la segunda Guerra Mundial por la JAC; un éxito que hace definitivamente inimitables las grandes leyes de orientación agrarias de 1960 y 1962 defendidas por Michel Debré y luego por Edgar Pisani y que condena de antemano al fracaso toda nueva tentativa de orientación de la agricultura.

(*) Director de Investigación del CNRS, Centro de Estudios de la Vida Política Francesa (París).

1. UN ÉXITO REALMENTE ESPECTACULAR

Es cierto que los resultados obtenidos por el sector en algunos decenios han sido impresionantes. En cuarenta años, la producción de trigo se ha triplicado, para pasar de 10 millones de tm en 1955 a 30 millones en 1994. El rendimiento por ha. ha seguido la misma evolución: 22,8 quintales en 1955 y 67,9 en 1994 (1). La producción de maíz, que era de 1 millón de tm en 1955, llegó a 13 millones en 1994 (al tiempo que el rendimiento por ha. pasaba de 24 a 80 quintales). El mismo salto hacia adelante ha experimentado la producción ganadera: la de carne de vacuno se duplicó entre 1955 y 1994, y la de porcino se triplicó. La implantación de las cuotas lecheras en 1984 estabilizó la producción en torno a los 22.000 millones de litros; en ausencia de esta medida, habría experimentado sin ninguna duda la misma evolución, puesto que fue de 17.800 millones de litros en 1955 y de 29.200 en 1967 (2). La revolución productivista de la agricultura francesa, poco afectada por la primera oleada de aumento del rendimiento entre 1850 y 1914, ya está asentada; la productividad se multiplicó por 7,2 entre 1950 y 1980, mientras que este coeficiente multiplicador era de sólo 5,2 para el conjunto de los países occidentales desarrollados durante el mismo período.

168

Pero esta evolución no ha afectado sólo a la agricultura. Al tiempo que Francia se alzaba al puesto de segundo exportador mundial de productos agrarios, se ha convertido, en 1996, en el primer exportador mundial de productos agrarios transformados. El desarrollo de la industria agroalimentaria ha desempeñado una función determinante en esta evolución, que ha conducido a Francia de la era agraria a la agroindustrial, caracterizada por la participación creciente de la industria en la actividad agraria. «La agricultura», señala Louis Malassis, «continúa desempeñando una función insustituible, pero sobre esta base se construye una superestructura industrial y comercial cuya participación en el gasto alimentario de los consumidores acaba siendo bastante más importante que la correspondiente a la agricultura» (3). Francia ilustra este cam-

(1) Fuentes: Tabla de economía francesa, París. INSEE, 1966; y Graph-Agri Francia, 1995. Ministerio de Agricultura y Pesca.

(2) Cifras citadas por el Sr. Gervais. *L'Économie Agricole Française*, en *L'Univers Politique des Paysans*. París, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1972: p. 5.

(3) Malassis, L.: *Nourrir les Hommes*. Flammarion, Dominos, 1994: p. 36.

bio con mayor claridad que otros países: tras batir récords en 1992 y 1993, el saldo positivo de la balanza comercial del conglomerado agroalimentario se ha estabilizado actualmente en torno a los 50.000 millones de francos.

Pero, una vez una vez satisfecho el triple desafío del aumento de la producción, la implantación de industrias de transformación y la conquista comercial, es preciso afrontar las consecuencias de esta trayectoria, que son inmensas.

2. EL DECLIVE DE LA PROFESIÓN DE AGRICULTOR

La primera de estas transformaciones es la espectacular disminución de la población activa agraria, que no pasa desapercibida en estos tiempos de interrogantes sobre el trabajo y el empleo. La población activa agraria se encuentra actualmente por debajo del umbral del 5 por ciento de la población activa (dos veces menos que el número total de parados). Este porcentaje era del 26 por ciento en 1954. El proceso de reducción no parece haber terminado, si se consideran las cifras de entradas y salidas de la agricultura.

Los 2,3 millones de explotaciones censadas en 1955 se habían reducido a la cuarta parte cuarenta años más tarde: 570.000 en 1995, y es muy posible que no sean más de 500.000 en el año 2000 (4). El carácter espectacular de esta reducción se aprecia con mayor claridad si se tiene en cuenta que a principios de siglo había más de 5 millones de agricultores. Estas cifras obligan a hacer tres observaciones:

Flujo de agricultores					
	1988-1992	1993-1994	1995-1997	1998-2002	2003-2012
Tasa media anual de disminución en %	6	3	2	1	1
N.º anual medio de abandonos	60.000	40.000	28.500	16.000	12.500
N.º anual medio de sucesiones	20.000	20.500	16.000	9.200	10.500
Tasa de sustitución	33	51	56	58	63

(4) Fuentes: Centre National pour l'Amélioration des Structures des Exploitations Agricoles (CNASEA); cifras publicadas en *Économie et Finances Agricoles*, n.º 286, enero-febrero de 1996.

- En primer lugar hay que señalar que, por el momento, el flujo de entradas se mantiene únicamente gracias a la demografía agrícola (9.000 entradas potenciales al año). Para garantizar que por cada abandono de la actividad se produce una incorporación sería necesario duplicar este flujo. Esta situación revela el voluntarismo del discurso de la Presidencia del Centro Nacional de Jóvenes Agricultores, que se esfuerza, abogando por la instalación en la agricultura, por frenar un movimiento de deserción dentro del propio mundo agrario.
- Segunda observación: la instalación como agricultor se hace cada vez más en solitario. El espíritu del CNJA y las leyes de 1960-1962 veían siempre esa instalación como una iniciativa de pareja (2 unidades trabajo-hombre). La modernización de la agricultura suponía la afirmación de la autonomía de la pareja frente a la empresa propiedad de la familia ampliada, afirmación simbolizada por la reivindicación del final de la casa familiar común. Pero la explotación seguía siendo un asunto familiar. Ahora lo que se impone es la autonomía del individuo en un movimiento complejo de limitaciones y opciones. Actualmente, el número medio de personas activas por explotación es de 1,5. Este fenómeno obedece a la persistencia en la agricultura de una tasa de celibato doble a la media nacional y, sobre todo, y este hecho es nuevo, a la autonomía profesional cada vez mayor de la esposa. En 1980 trabajaban fuera de la explotación menos del 5 por ciento de las esposas de agricultores (sin distinción de edades); en la actualidad, el 50 por ciento de las esposas de agricultores de menos de 35 años desarrollan su vida profesional fuera de la explotación. Esta acusada tendencia altera profundamente la relación entre agricultura y familia, considerada durante mucho tiempo, incluso en la fase de modernización, como constitutiva del oficio de agricultor.
- Por último -tercera observación- hay que subrayar que estas cifras de flujos de entrada y salida no tienen en cuenta las instalaciones como agricultor no subvencionadas, que podrían estimarse en un 30 por ciento del total. Estas instalaciones no subvencionadas no se pueden beneficiar de la ayuda pública (la Dotación Joven Agricul-

tor o DJA) por no alcanzar el sujeto la superficie mínima de instalación o la formación exigidas, por resistirse a invertir por temor al endeudamiento, o por no querer participar en el mecanismo institucional de encuadramiento. Las causas son, pues, múltiples, pero el fenómeno plantea una doble pregunta: ¿pueden considerarse estos agricultores instalados sin subvención como posible vivero de renovación de la población activa agraria?, ¿se les quiere integrar? Se trata, obviamente, de una población frágil; incorporada a la agricultura de forma irregular ilustra las dificultades que un número de jóvenes cada vez mayor encuentra para integrarse plenamente en la vida activa. Y, sobre todo, revela hasta qué punto los procesos de normalización profesional pueden convertirse en procesos de exclusión. El problema está en saber si el mundo agrario y los poderes públicos quieren dejar vegetar esta población en una especie de tierra de nadie profesional por no ajustarse a las normas o si las organizaciones agrarias, los poderes públicos, los colectivos territoriales y el sistema de formación son capaces en conjunto de idear un régimen complementario para formar a esta población. En cualquier caso, urge levantar acta del desfase que hay entre el derecho y los hechos, y para ello es preciso revisar los criterios de instalación heredados de las célebres leyes de 1960-1962. Se trata de una nueva página que es necesario escribir.

3. DE LA TIERRA COMO PATRIMONIO A LA TIERRA COMO CAPITAL: CONCENTRACIÓN Y ABSTRACCIÓN

Esta revisión es tanto más indispensable cuanto que, al mismo tiempo, la estructura de las explotaciones agrarias ha evolucionado de forma considerable y ha dado lugar a una paradoja inesperada: si el oficio de agricultor nunca había sido tan solitario, tampoco había conocido jamás tal proliferación del fenómeno asociativo.

El período reciente se caracteriza por la explosión de formas societarias en la agricultura: Agrupaciones agrícolas de explotación en común (GAEC), Sociedades de hecho, Sociedades civiles de explotación agraria (SCEA), Explotaciones de

responsabilidad limitada (EARL), Agrupaciones de tierras agrícolas (GFA), Cooperativas de utilización de material agrario (CUMA), etc. Actualmente, estas formas societarias son todavía minoritarias, y afectan como máximo a 100.000 explotaciones. Pero su número aumenta a razón del 4 por ciento anual, mientras que la tasa de disminución de explotaciones es del 3 por ciento. «La superficie media de las explotaciones individuales pasó entre 1970 y 1995 de 18 a 31 ha., y de 56 a 96 ha. la de las explotaciones en régimen de sociedad» (5), que ocuparán el 50 por ciento de la Superficie Agrícola Útil (SAU) en el año 2000 y quizá el 65 por ciento en el 2005, es decir, dentro de diez años (6). La tendencia es clara: en 1991, la mitad de los jóvenes agricultores que se instalaron beneficiándose de dotaciones lo hicieron en un marco societario, y la proporción llegó al 80 por ciento en Haute-Marne. Esta evolución plantea tres problemas:

- En primer lugar, marca el final del modelo de explotación familiar heredado de la agricultura campesina. Esto obliga a replantearse al mismo tiempo el estatuto jurídico del agricultor y los modos de entrada en la agricultura. Además de no acoger la instalación no subvencionada, la política de instalación como agricultor elaborada desde la última guerra es incapaz de asimilar la integración societaria. Pero en la actualidad, en unos casos por su número y en otros por su peso económico, las sociedades se han convertido en realidades ineludibles.
- Por otra parte, estas formas societarias contribuyen poderosamente a acelerar la concentración económica y parcelaria en la agricultura. Una cuarta parte de las explotaciones –incluidas las sociedades– cultivan actualmente más de los dos tercios del suelo. Facilitan la movilización rápida de capitales y complementan un proceso inmenso de concentración geográfica de la producción. Los diez principales departamentos productores –todos ellos situados al norte de la línea Nantes-Estrasburgo–

(5) Coutel, J. M.: «Statut juridique des exploitations: l'explosion des phénomènes sociétaires». *Économie et Finances Agricoles*, n.º 286, enero-febrero de 1996.

(6) Coutel, J. M.: *Estimación realizada por la Sociedad de Agricultores de Francia*. art. cit.: pp. 16-17.

producen tanto como los 45 menores, y la distribución de los consumos intermedios está aún más concentrada que la producción: diez departamentos consumen el 30 por ciento de las compras nacionales (Finisterre consume él sólo el 4,8 por ciento). Este doble fenómeno de concentración y especialización ha moldeado un paisaje agrario que nada tiene que ver con el de una Francia en la que se producía un poco de todo en todas partes, a semejanza de las propias explotaciones que, hasta la segunda Guerra Mundial, conservaron ambiciones de autosuficiencia doméstica relativa. Se constata un principio de ruptura entre la explotación, el capital y el factor humano. La explotación puede ahora localizarse físicamente en varios lugares, incluso en varias regiones. El capital se hace cada vez más abstracto; aun cuando continúa siendo de origen familiar, tiende a diversificarse y hacerse más complejo y aparecen holdings. En cuanto al agricultor, puede vivir en una ciudad o en cualquier otro sitio fuera de su explotación. La unidad de tiempo y espacio propia del trabajo agrario se ha roto.

- Por último, y este puede ser el aspecto más importante, el desarrollo societario ha transformado el estatuto de la tierra. El siglo XIX, y en especial la III.^a República, convirtieron la tierra en patrimonio familiar. La República atrajo a su campo a los campesinos del Antiguo Régimen transformándolos en pequeños propietarios. La fuerza de esta lógica patrimonial explica también el relativo retraso del desarrollo técnico y económico de la agricultura francesa hasta la segunda Guerra Mundial. Después de la contienda, los jóvenes agricultores decidieron considerar la tierra como «herramienta de trabajo», no como patrimonio inmobiliario, lo que justificó y permitió la concentración parcelaria, la ordenación y el intercambio. Acaba de darse un nuevo paso que ha hecho de la tierra no tanto un instrumento cuanto un capital *inmovilizado*. Se impone la lógica financiera que exige al capital un *rendimiento*, al precio de entrar en conflicto con la demanda social general, que quisiera que esta tierra fuese también considerada como patrimonio intergeneracional, bien público y patrimonio de la nación. La práctica económico-financiera a corto plazo entra en

contradicción con la visión a largo plazo del bien común; la tierra ocupa el centro de una reconciliación indispensable, pero difícil, entre las prácticas dominantes en el mundo agrario y los deseos de la sociedad.

4. LA IMPORTANCIA DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA Y LOS LÍMITES DE SUS EFECTOS CORRECTORES

Gestión de poblaciones, gestión de espacios, pero también gestión de fondos públicos; la agricultura francesa y europea ha progresado gracias a un poderoso esfuerzo de la colectividad. A grandes rasgos, éste puede desglosarse como sigue: por una parte, el presupuesto de agricultura constituye más de la mitad del presupuesto de la Unión Europea; por otra, cerca de la mitad de las rentas de los agricultores franceses provienen de fondos públicos. El hecho en sí no es nuevo; al sustituir el sostenimiento público de los precios por una ayuda compensatoria directa, la reforma de la política agrícola común de 1992 se limitó a dar un poco más de transparencia a la situación.

174

A escala de la Unión Europea, la importancia de la intervención pública en la constitución de las rentas agrarias se concreta en el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (60 por ciento del presupuesto total comunitario en 1991, víspera de la reforma de la PAC). La sección «Garantía» del FEOGA permite financiar los gastos necesarios para mantener los precios o compensar su baja. Por sí solos, los gastos del FEOGA «Garantía» suponen más de la mitad del presupuesto comunitario (51,7 de los gastos comunitarios en 1994) y las nueve décimas partes de los créditos destinados a financiar la agricultura. A esto hay que sumar el FEOGA «Orientación», que sirve para financiar la mejora estructural de las explotaciones, las infraestructuras rurales, las medidas de reconversión y las compensaciones de los obstáculos naturales. La agricultura francesa ocupa un lugar privilegiado en este sistema, pues recibe cerca de la cuarta parte de las ayudas europeas, frente al 20 por ciento antes de la reforma.

Por su parte, en los presupuestos del Estado se destina a la agricultura un 10 por ciento de los gastos; la cifra fue de 174.000 millones en 1995. El 44,3 por ciento de estos gastos

sirven para financiar la protección social. Con 900.000 cotizantes para 2,1 millones de jubilados, el régimen de protección del mundo agrario está financiado en más del 80 por ciento por la solidaridad nacional. El 43 por ciento del presupuesto se dedica al sostenimiento de actividades agrarias productivas (7). A ello hay que sumar el desembolso de las regiones y departamentos. La evaluación es difícil, pero la suma asciende como mínimo a 3.000 millones de francos. Sea como sea, el apoyo de la colectividad a un sector que en 1994 empleó a menos del 4,8 por ciento de la población activa y contribuyó al 2,5 por ciento del PIB, frente al 7,2 por ciento en 1970 es, obviamente, de primera magnitud.

Pero este esfuerzo, lejos de reducir las diferencias de rentas dentro del mundo agrario y, sobre todo, lejos de reducir las diferencias de desarrollo en el conjunto del territorio, parece acrecentarlas. No se aprecia ningún efecto redistributivo de las rentas a favor de los agricultores económicamente más frágiles. Al final de un estudio comparativo de tres regiones, F. Colson precisa que la región Centro, que agrupa grandes unidades de producción cerealista, es, desde 1994, la que recibe más ayudas directas por explotación: 181.000 francos por término medio. Esta suma es dos veces mayor que la recibida por una zona más desfavorecida, como Auvernia (91.000 francos), o por la región lechera del País del Loira (77.000 francos) (8). En efecto, una explotación cerealista de más de doscientas hectáreas recibe compensaciones superiores a 600.000 francos. Esta limitación de los efectos redistributivos de la ayuda debilita el conjunto del sistema, pues, si el principio de la compensación de una pérdida de ingresos parece admisible, la transformación de esta compensación en renta plantea un problema político y moral de gran importancia.

5. POR UNA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE CALIDAD

A estos problemas se añade en época más reciente una nueva dificultad, derivada de la transformación rápida de las

(7) Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

(8) Colson, F.; Chatelier, V. y Ulmann, L.: Réforme de la PAC et répartition des paiements directs aux exploitations agricoles. *Économie Rurale*, n.º 227, mayo-junio de 1995: p. 21.

expectativas de nuestras sociedades en relación con el campo, la agricultura y la alimentación. Es difícil evaluar este cambio de opinión, pero ciertos acontecimientos, comportamientos y sondeos permiten ya observar que lo que se pone en tela de juicio es la racionalidad del mismo principio de la agricultura productivista. Subyacente en los debates suscitados por el tratamiento hormonal de las terneras, el cuestionamiento del proceso por el cual el imperativo de la rentabilidad ha llevado a cosificar a los animales para reducirlos a máquinas de transformar proteínas vegetales en proteínas animales, ha alcanzado en nuestros días un punto sin retorno.

Dos acontecimientos recientes muestran, más allá de la escenificación reivindicativa, que la duda está cada día más generalizada; ambos abren el camino al replantamiento directo del tipo de racionalidad que domina la agricultura. El primero fue la manifestación, en febrero de 1996, de los habitantes de Saint-Brieuc, situado en el centro de la «bahía de cochinos», para protestar contra la degradación de la calidad del agua. La protesta apuntaba de manera muy clara a la ganadería sin suelo, como si el cuerpo social se preguntase súbitamente si era razonable tener que elegir entre jamón barato y libre disposición de agua pura. La publicación por el Ministerio de Medio Ambiente del mapa de degradación acelerada de las aguas subterráneas a consecuencia de los nitratos ha venido a confirmar que se trata de un grave fenómeno de alcance nacional. El mundo agrario ha conquistado sus cartas de nobleza atendiendo las necesidades alimentarias del país, y no puede contemplar con menosprecio la cuestión del agua, que en el futuro será para el hombre más importante que la alimentación. ¿Cómo van a aceptar los consumidores y ciudadanos que los agricultores respondan que el problema del agua, el más vital de los productos, no es asunto suyo?

En este ambiente se planteó en abril de 1996 la cuestión de las «vacas locas». Entre revelaciones y comentarios se han descubierto los efectos perversos de la desregulación thatcheriana; una vez que los poderes públicos dejan de garantizar los controles veterinarios, la ley del mercado y el imperativo de producir a un coste cada vez más bajo se imponen a las normas más elementales de seguridad en materia de alimentación animal. De este modo, son los propios exportadores

quienes deben ejercer el control. En un clima cargado por el recuerdo del escándalo de la sangre contaminada, la política no puede dejar de reaccionar. Pero la reacción desencadena la crisis; la proclamación del embargo subraya la gravedad del asunto ante la opinión pública, que reaccionó rápidamente. Desde entonces, la parálisis es completa.

¿Ayudará el tema de las «vacas locas» a comprender la ambivalencia creciente de nuestra sociedad, que exige cada vez menos controles y, al mismo tiempo, mayor seguridad en materia de agricultura y alimentación? Más allá de este desdichado caso, nuestras sociedades, que han cortado las verdaderas relaciones con el mundo animal y vegetal, afrontan el imperativo de reanudar los vínculos con el mundo viviente. ¿Se aprovechará la ocasión para reevaluar un progreso agrario regido por una racionalidad tecnoeconómica, productivista y unidimensional? ¿Podrá inventarse una agricultura fundada en una racionalidad pluridimensional y compleja, capaz de colocar en primer lugar los imperativos de salud que afectan tanto a los consumidores como a los productores, que mire al largo plazo tanto como al corto y que, en lo relativo al uso de los recursos naturales, conceda a la estrategia patrimonial tanta importancia como a la búsqueda del rendimiento financiero? Estamos aprendiendo que no es posible reducir impunemente el proyecto agrario al único imperativo de minimizar el coste del kilogramo de proteína animal. Sobre todo si se considera que una producción de este tipo puede trasladarse a otro lugar fácil y rápidamente. Un proyecto así no contaría con la adhesión duradera de los consumidores, y mucho menos de los ciudadanos y contribuyentes.

Esta reorientación impone la revisión radical de la propia noción de productividad agraria. Se oye decir con frecuencia: ¿cómo permitir algo así, cuando la mitad de la humanidad se muere de hambre? ¿No es misión de un país tan ricamente dotado en el plano agrario como Francia proveer de alimentos, con lo cual resulta posible, al mismo tiempo, salvar la propia agricultura? Este argumento «generoso» es el más especioso de todos, ya que la muy tardía y dudosa vocación exportadora de Francia nos conduce a dos callejones sin salida. El primero es que esta ambición exportadora, que sólo afecta a un sector minoritario de las explotaciones, conduce a aplicar al conjunto de la agricultura una lógica productivista orientada

a reducir el número de explotaciones a 300.000 como máximo en un plazo de veinte años. El segundo es que esta pretensión de alimentar al mundo compartida con Estados Unidos priva definitivamente a un número cada vez mayor de países de la esperanza de construir o reconstruir su propia agricultura. ¿Tiene o no validez universal el conocido lema «ningún país sin campesinos»? Si la revolución verde es un factor determinante del crecimiento en Asia, ¿cómo olvidarse de hacer de la agricultura uno de los ejes del (re)nacimiento económico de Europa central, el Mediterráneo, Africa, Oriente Medio o determinados países de América Latina? En lugar de pujar en la carrera por poseer el arma alimentaria que se ha iniciado durante la Ronda de Uruguay, Francia, y con ella Europa, debería defender un orden mundial que respetase el derecho de los pueblos a alimentarse a sí mismos.

6. POR UNA POLÍTICA DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL

En el actual debate sobre la ordenación del territorio parece como si pensásemos que, cuando la agricultura prospera, el territorio se ordena bien. Sin embargo, nada es menos cierto; hay que señalar que, en los últimos cuarenta años, la agricultura ha participado con fuerza en el proceso de «desordenación del territorio». Como ya hemos comentado anteriormente, los diez principales departamentos productores, situados al norte de la línea Nantes-Estrasburgo, producen tanto como los cuarenta y cinco menores, y la tendencia continúa. Hace veinte años, la producción se concentraba claramente en el norte, Picardía y Bretaña. Desde entonces, el oeste ha reforzado su posición con el desarrollo de Bretaña y el aumento de la importancia de las comarcas del Loira.

Esta concentración de la producción se combina con una acusada especialización regional. Diez departamentos suministran el 41 por ciento de la leche, frente al 32 por ciento en 1963. El mismo número concentra el 60 por ciento de la producción porcina. La región de Bretaña suministra el 45 por ciento del total, mientras que hace veinte años sólo producía el 23 por ciento del cerdo francés. Otros tantos departamentos producen el 35 por ciento de toda la carne de vacuno, y diez casi el 40 por ciento de los cereales.

Este doble fenómeno de concentración y especialización ha transformado por completo el paisaje agrario.

Al terruño ha sucedido la «cuenca»: cuenca cerealista, cuenca de cría, porcina, lechera, etc., a semejanza de las cuencas industriales, cuyo ascenso a la categoría de cuenca precedió a su obsolescencia o a su abandono. Si se mantiene la línea de evolución actual, no es exagerado afirmar que entre el 70 y el 80 por ciento de la producción agraria europea en volumen podría concentrarse, en el horizonte de los años 2010-2020, en el litoral de la Mancha, desde Rouen hasta Rotterdam, con prolongaciones hacia Bretaña por el oeste y Dinamarca por el noreste, a medida que se multiplicasen las fábricas de pollos, cerdos y quizá vacas en zonas portuarias, industriales y urbanas. Se estima que el 4 por ciento del territorio de los Estados Unidos bastaría para cubrir las necesidades alimentarias del país. En Francia se sigue la misma evolución. Sabemos que podemos concentrar en diez departamentos la casi totalidad de la producción porcina, aviar y vacuna y, en parte, cerealista, sin olvidar las legumbres y hortalizas.

El otro aspecto del nuevo despliegue de la agricultura, y probablemente el más importante, pues posibilita el anterior, es que la producción agraria ya no está vinculada al suelo; una verdadera revolución técnica, así como jurídica y económica, ha conducido a la invención de la agricultura sin suelo y, de forma más general, de la producción sin suelo. Las consecuencias de esta transformación son de enorme calado; un ejemplo concreto permitirá hacerse una idea de su amplitud y carácter inmediato. Desde 1990 el señor Pohlmann, un industrial alemán, trata de instalar en Francia una explotación gigantesca con capacidad para 5,5 millones de gallinas, que produciría 4,2 millones de huevos diarios. Su localización se hace en función de la red de autopistas. El promotor ha considerado idóneo el departamento de Marne, un lugar desde el cual pueda atender a sus clientes del sur de Alemania mejor que desde sus actuales instalaciones del norte de ese país. El proyecto, en todo caso, no es nuevo. El señor Pohlmann gestiona un complejo avícola dos veces mayor en Ohio. En Francia bastarían siete centros como el proyectado en Marne para mantener la producción actual de huevos. Pero vayamos más lejos: nada impediría concentrar estas «fábricas de huevos» en tres o cuatro departamentos no alejados de los grandes puertos ce-

realistas y cerca de los centros de consumo, junto a los principales ejes de transporte aéreo y terrestre. Cabría imaginar incluso que en unos años, estas mismas fábricas, por razones puramente comerciales y económicas, se trasladasen a Europa central o a Asia. Desde el punto de vista técnico y económico, nada se opone a una reconversión completa, con el traslado de toda la producción francesa y europea de huevos en el curso de cinco a diez años.

Este caso de explotación gigante presenta otros aspectos de interés; aquí consideraremos únicamente su capacidad para ilustrar el corte radical establecido progresivamente entre producción agraria y territorio, ruptura que certifica la propia expresión de agricultura sin suelo. En efecto: las primeras explotaciones sin suelo instaladas en Bretaña en los años sesenta se basaban en la misma lógica de integración, industrialización y deslocalización que el gallinero gigante de Pohlmann; el proyecto supone más un cambio de escala que de naturaleza, aunque las primeras explotaciones fueran de propiedad familiar, dimensión que se pierde por completo en el segundo caso (que, por cierto, crearía trescientos puestos de trabajo).

Lo que se ha dicho para la producción animal es aplicable también a la hortícola; el regadío y los túneles de plástico permiten obtener tres cosechas anuales. Hagamos, sin exagerar demasiado, un poco de ficción: imaginemos unos invernaderos de varios pisos que permitan cultivar, cerca de los centros de distribución, cantidades enormes de productos frescos sin suelo. Este horizonte no está muy lejos: donde el cultivo bajo plástico ha experimentado un mayor crecimiento en los últimos años ha sido en Val-d'Oise, no en un departamento «rural». Se dirá que esta tendencia es mucho menos acusada en el caso de la producción de cereales y productos oleoproteaginosos; aunque así sea, los progresos actuales de la biotecnología autorizan a esperar aumentos espectaculares de la productividad por hectárea. De hecho, los cambios que ha experimentado el mapa de la producción agraria en los últimos cuarenta años distan de haber concluido. Todo está a punto para que se produzcan nuevos «traslados» todavía más radicales y rápidos.

Se ha hablado de «urbanización del campo» para caracterizar el nuevo modo de vida que se está instaurando en las

zonas rurales y para subrayar el final de una especificidad rural. En cuanto a los fenómenos de deslocalización que afectan a la actividad agraria y a las transformaciones radicales que experimentan las sociedades rurales se podría, en última instancia, hablar de «desarraigo» de la población rural y de «ruptura de la ruralidad». La ruralidad ya no sería un paisaje y un marco vital, ni el resultado de una forma de sociedad y de relaciones socioeconómicas. El mundo agrario se ve afectado por este fenómeno poderoso y moderno de ruptura entre el lugar de producción y el hábitat. Ni en el campo ni en la ciudad hay ya coherencia entre el lugar en que se ejerce la profesión y aquél en que se desarrolla la vida en común. Esto es tan cierto que ya hay agricultores que no viven en su explotación, sino que se desplazan hasta ella todos los días, igual que irían a cualquier otro lugar de trabajo. Otros disponen de terrenos cultivados en distintos sitios, incluso en varios departamentos. No se trata de una novedad: desde hace ya dos decenios (cuatro en algunos casos) hay sociedades civiles de explotación agrícola cuyo domicilio social se encuentra en la región parisiense y cuyas tierras están en las Landas, Cher, Indre, etc. Se ha perdido la superposición obligada de identidad jurídica, superficie, aperos y hábitat, que será cada vez menos frecuente. En el Reino Unido hay una empresa de servicios que gestiona 20.000 ha. y que se desplaza en función del calendario agrario. Esta empresa empieza ahora a ofrecer sus servicios en Francia, en particular en Loir-et-Cher y Loiret. Imaginemos una explotación cuyo capital territorial se constituya como agrupación de tierras agrícolas; la tierra, antes formada por parcelas identificadas cada una por su nombre, se convierte así en algo abstracto, en poder de un socio. Supongamos que esta explotación es gestionada por una empresa de servicios sin propiedades permanentes. ¿Dónde está el pretendido «arraigo» de la agricultura? ¡Sólo en la reunión anual del consejo de administración!

Sin suelo y móvil: así ha resultado ser una parte de la agricultura francesa. Como otros sectores económicos y socioprofesionales, la agricultura se está transformando en una actividad de localización precaria y modificable.

Se trata de una transformación profunda de igual naturaleza que la que engendró la crisis urbana. Se percibe con mayor intensidad en Francia debido a la antigüedad de su cultura

agraria, pero el fenómeno es de alcance mundial; en todas partes, en todos los continentes, las áreas de producción agraria se acercan a las zonas de consumo. No hay motivo para que Francia y Europa, por algún milagro inexplicable, puedan escapar a esta tendencia, sin adoptar las medidas apropiadas.

En otras palabras: está abierto el camino para replantear la política agraria y hacer de la relación con el territorio su eje central, tanto a escala regional como nacional y europea.

Desde que se planteó la cuestión de la desertización, se ha adquirido la costumbre de deducir la problemática de la ordenación territorial a partir de los objetivos asignados a la agricultura. Es preciso a partir de ahora hacer lo contrario, y determinar nuevos objetivos para la agricultura en función de las perspectivas de ordenación. Para avanzar por este camino cabe considerar cuatro orientaciones básicas: *marco de vida*, *territorios de integración*, *territorios integrados* y *reubicación de la producción agraria*.

En primer lugar, es preciso abandonar la idea de campo-espacio de producción, como exclusiva responsabilidad de los agricultores, en favor del concepto de *marco de vida*, que afecta a todos los ciudadanos. A tal fin, hay que considerar con seriedad las expectativas de los franceses en relación con los espacios rurales. El hecho de que Francia sea el primer país del mundo en número de residencias secundarias y de días pasados por sus habitantes en el campo no es en absoluto secundario ni anecdótico. Constituye un indicador de las expectativas del cuerpo social en materia de medio ambiente, estética del marco de vida, conservación del patrimonio edificado y no edificado y conservación del paisaje. La recuperación de los centros urbanos y su rehabilitación se hace, en parte, movilizándolo estas expectativas. El mismo planteamiento puede trasladarse a los espacios rurales. Supone ante todo considerar el mantenimiento del país como asunto de todos. Así como la ordenación y el embellecimiento de París no afectan sólo a los parisienses, la ordenación del espacio rural no debe considerarse asunto exclusivo de sus habitantes. Además, si se estimase que sólo éstos tienen la vocación de ocuparse de tales espacios porque trabajan la tierra, habría que confiar el 50 por ciento de la superficie agraria útil al 1 por ciento de la población activa francesa. A quienes se pregunten si los franceses estarán realmente dispuestos a invertir dinero –mucho dine-

ro- en una empresa colectiva de esta naturaleza habrá que recordarles que la parte de su presupuesto dedicada a cultura y entretenimiento es ya igual a la destinada a la alimentación, y que además aumenta con regularidad mientras que ésta se mantiene estancada. Es perfectamente imaginable que una parte de estos recursos dedicados al ocio y cultura se dirija al mantenimiento de los espacios; nadie familiarizado con el senderismo consideraría abusivo que la colectividad nacional le solicitase participar en las operaciones de ordenación que suponen los senderos. Todavía cuesta imaginar que haya que pagar por caminar, escalar una montaña o disfrutar de un paisaje. Para bien o para mal, el romanticismo de la «gratuidad de la naturaleza» probablemente ha terminado, pues en el mundo actual el espacio y el aire puro se han convertido en recursos escasos. La aceptación colectiva de esta situación es probablemente el único modo de luchar eficazmente contra la pura y simple privatización de los espacios; piénsese, por ejemplo, en el futuro de la Sologne (donde está a punto de prohibirse la marcha «libre» a pie debido a la caza) o en la suerte del litoral. Corresponde a la colectividad pensar en los medios que deben mobilizarse para reducir las desigualdades de acceso a la naturaleza que ya se derivan de esta situación.

Para justificar la necesidad de esta política de participación económica de los usuarios de la naturaleza, que no dejará de sorprender a algunos, recordemos que en 1990, según la Federación Nacional de Sociedades de Ordenación del Mercado de Tierras (SAFER), un tercio de las tierras vendidas lo fueron a personas ajenas a la agricultura. Estas operaciones representaron la mitad del valor de todas las transacciones de tierras. Sólo en la región del Auge, el 52 por ciento del mercado notificado en 1991 a la SAFER de la Baja Normandía correspondió a tierras adquiridas por no agricultores. Lejos de significar un abandono o una ampliación de los eriales, estas transacciones señalan ante todo una nueva vía de mantenimiento del patrimonio, tanto de la edificación como de las tierras.

Segunda orientación necesaria: hay que contemplar el campo como un conjunto de *territorios de integración*. Actualmente, los agricultores son minoría en el campo, pero continúan considerando espontáneamente que la gestión de estos espacios es competencia suya, no sólo por ser sus ocupantes activos actuales, sino también en su calidad de herederos de

un pasado que se caracterizó por la victoria de los labradores sobre los señores feudales. Aun cuando no se exprese, este sentimiento de titularidad de derechos especiales e inmemoriales sobre la tierra entra a veces en conflicto con los principios elementales de la cultura democrática: un hombre, un voto; todos los votos tienen el mismo valor. Un agricultor, alcalde de su municipio, me explicaba en cierta ocasión que era «natural» que él fuese alcalde, pues pagaba la mayor parte de los impuestos sobre el suelo rústico... lo cual no le impedía reclamar con energía la supresión de dicho impuesto. Esta anécdota ilustra la dificultad que supone en este contexto presentar el campo como un territorio de integración abierto y ofrecido a no agricultores que se desplazan a vivir ahí y que deben sentirse responsables. Se impone un cambio de mentalidad para que, a su vez, resulte «natural» esta apertura, condición imprescindible para la protección del territorio. En ese momento nos hallamos muy lejos de tal objetivo. Los trabajadores, por ejemplo, que suponen el 40 por ciento de la población activa residente en municipios rurales, no han accedido nunca (o han accedido sólo de forma excepcional) a puestos de representación. El 40 por ciento de los hogares rurales están ocupados por jubilados. Aunque muy activos en la vida social, no están presentes como colectivo en el debate sobre el futuro del mundo rural. Un individuo determinado o una personalidad pueden acceder a la magistratura local, por supuesto; pero el hecho de que grupos (sociales o de edad) dotados como tales de un peso sociológico importantísimo no se consideren lo bastante cualificados para representar legítimamente a las colectividades rurales provoca un déficit de ciudadanía muy perjudicial para el proyecto de devolver la vida al campo. El mundo rural se enorgullece con justicia de su capacidad para encarnar solidaridades antiguas y estables, en contra de la automatización que caracteriza al mundo urbano; pero es imprescindible, incluso para conservar esta cualidad que actúa como foco de atracción, integrar en él a las nuevas poblaciones que acuden a vivir al campo.

Para desempeñar esta función integradora es indispensable que el campo se constituya en *territorios integrados*, condición que constituye la tercera orientación. La dificultad estriba en que también el campo, al contrario que las antiguas sociedades campesinas, participa de la diferenciación funcional

de los espacios característica de las sociedades modernas. La disociación entre lugares de trabajo, de residencia, de ocio, de enseñanza y de consumo afecta a las zonas rurales tanto como a las urbanas, y la imagen de los barrios periféricos, paradigma de un universo asocial, reducido a la mera función de dormitorio, puebla las pesadillas de los habitantes del campo en igual medida que las de los habitantes de la ciudad. Se dice que nadie pasa tanto tiempo en coche como la esposa de un agricultor, que, en efecto, debe llevar a los niños a la escuela, al centro cultural, al polideportivo o al médico, hacer la compra en el hipermercado, construido en un cruce en pleno campo, acudir a las reuniones profesionales, etc., lugares todos ellos situados a una distancia considerable de su casa. Esta ampliación del espacio vital de los habitantes del medio rural, que supera ampliamente el del municipio, obliga a imaginar el territorio como una entidad continua que va desde lo rural a lo urbano pasando por lo semiurbano, casi siempre en contradicción con los mecanismos de gestión administrativa de los espacios rurales. El principal problema de la gestión territorial consiste actualmente en determinar los vínculos que deben establecerse entre las ciudades medias, los centros de los pueblos y el tejido rural que rodea todo ello. No se acabará con la amenaza de la desertización oponiendo el espacio rural a la ciudad, sino tomando en consideración positivamente las relaciones entre ambos. Tampoco es necesario culpar a ese tejido fascinante y exclusivo de Francia constituido por la red de 36.500 municipios (tantos como en el resto de la CEE); en una sociedad incierta que debe afrontar la aceleración del cambio, es incluso vital conservar estas referencias esenciales para la identificación social y local. Por otra parte, la presencia en el territorio nacional de 36.500 asambleas interesadas por el bien común constituye una riqueza democrática incuestionable. Pero probablemente es necesario prolongar el proceso ya en curso de fortalecimiento y modernización de las formas organizadas de cooperación entre municipios. En particular, es preciso evitar que estas organizaciones intermunicipales contribuyan a reforzar las barreras territoriales encerrando a los habitantes rurales con los rurales y a los urbanos con los periurbanos. Por el contrario, hay que utilizar estos mecanismos de cooperación para recomponer los territorios y facilitar los procesos de apertura nacional e internacional.

La definición de una política de ordenación territorial que sea al mismo tiempo política de marco de vida, de integración de los nuevos habitantes del espacio rural en el conjunto nacional e internacional, no significa que la cuestión específicamente agraria haya dejado de ser pertinente desde el punto de vista de la ordenación. Antes al contrario: es esencial, dentro de la dinámica que ha llevado a ampliar los objetivos de la ordenación, tener en cuenta, como una de las cuatro orientaciones necesarias de tal política, la cuestión de *la distribución de la producción agraria en el conjunto del territorio*. Puesto que se trata, precisamente, de la integración nacional e internacional de los espacios, es de importancia capital combatir los graves desequilibrios que la distribución desigual de la producción instaura en dichos espacios. Como se ha señalado, si se mantiene la tendencia actual, el 80 por ciento de la producción agraria recaerá sobre el 20 por ciento de la población agraria activa, que ocupará el 20 por ciento de la superficie agraria útil. Para situar la agricultura en el centro del proyecto de rearticulación de las relaciones entre hombre, territorio y producción, objeto de la política de ordenación, no basta afirmar con energía que la esencia de la profesión agrícola radica precisamente en ejercer un oficio vinculado al territorio y que debe conservarse esta dimensión específica del oficio de agricultor. Es necesario aceptar al mismo tiempo el replanteamiento del sistema de ayudas a la agricultura en función de la geografía, y no sólo del mercado. Esta perspectiva ya ha presidido la aplicación de medidas en favor de la agricultura de montaña. Es posible desplegar la misma lógica a escala del conjunto del territorio, pero con la condición de que la profesión agrícola que participa directamente en la elaboración de los mecanismos de sostenimiento sepa dar testimonio de una capacidad de arbitrio interno impecable. Los agricultores no pueden al mismo tiempo reivindicar el poder profesional en los organismos de cogestión de la política agraria y exigir que los arbitrios indispensables recaigan íntegramente sobre los poderes públicos o sobre las instancias políticas. La intervención será más eficaz en la garantía de la regulación del conjunto de los procesos de ordenación si tiene frente a sí una profesión agrícola capaz de hacer valer sus propios objetivos a medio y largo plazo. El reto es de naturaleza tanto profesional como política. Por ello es necesario integrar la cuestión de los

vínculos de la actividad agraria con el suelo en el marco de un planteamiento global de los problemas de localización de las actividades productivas en todo el territorio para tener, al mismo tiempo, la oportunidad de renovar la propia definición del oficio de agricultor.

7. ¿QUÉ AGRICULTURA PARA EL TERCER MILENIO?

¿Cómo imaginar una agricultura ajustada a las expectativas y a los intereses del conjunto de la sociedad en el horizonte del próximo medio siglo? Para ello es preciso ante todo aceptar seriamente que la agricultura produce bienes no sólo materiales, sino también inmateriales; no únicamente productos alimenticios, sino también no alimenticios; además de comerciales, no comerciales.

Durante siglos, el mundo agrario se ha visto a sí mismo como productor de bienes materiales alimentarios, y se ha integrado en la economía moderna produciendo e intercambiando volúmenes. Ahora ha de tomar conciencia de que la producción de materias primas alimentarias requiere un número cada vez menor de explotaciones y activos. La misión de producir bienes materiales alimentarios continúa vigente, pero, en el horizonte del año 2000, no genera nuevas incorporaciones como agricultor ni nueva creación de riqueza. La historia del siglo XX enseña, por el contrario, que las sociedades desarrolladas no dejan de reducir sus actividades mineras, de extracción y explotación de recursos naturales, para transformarse en sociedades de invención y producción de su materia prima energética. En este contexto, la producción biológica y biotecnológica de energía se convierte en una empresa estratégica y medioambiental a largo plazo, de importancia comparable a la empresa alimentaria de ayer. Junto a esta producción de carácter energético, la agricultura debe proporcionar las moléculas básicas que utilizan las industrias de síntesis, textil o farmacéutica. Conducir el mundo agrario por medio de estas producciones no alimentarias hacia una nueva cultura de la energía y el medio ambiente es una orientación innovadora de largo alcance.

Pero la agricultura no es sólo una actividad creadora de bienes materiales y materias primas. Es también –y puede serlo cada vez más– un sector productor de bienes inateria-

les en dos ámbitos principales. El primero engloba todo lo relacionado con la cultura, la salud, la gastronomía, el turismo, la pedagogía y la formación de los niños. Es preciso inventar nuevos oficios para responder a las expectativas de consumidores y ciudadanos. En este sector, como en otros, es la oferta la que induce el despliegue de la demanda, que no dejará de aumentar con la urbanización, la reducción del tiempo de trabajo, la semana escolar de cuatro días, la prolongación de la expectativa de vida, etc. No se trata de una demanda «secundaria» o «subsidiaria», asociada con el ocio y la distracción de los habitantes de las ciudades que echan de menos los espacios abiertos (aun cuando el consumo de cultura y ocio suponga una parte cada vez mayor del presupuesto de los hogares franceses). Se concreta también en una aspiración más profunda que quiere redefinir –más allá de los museos, parques y otras exposiciones destinadas a explicar un mundo agrario cada vez más alejado de aquéllos– los vínculos que la sociedad mantiene con la naturaleza por medio de la agricultura y los agricultores.

La segunda categoría de producciones inmateriales agrupa las producciones de naturaleza, medio ambiente, agua, paisaje y equilibrio territorial. Es evidente que un país –y, con mayor razón, un continente– que posea estos bienes naturales será más rico, incluso desde el punto de vista contable, que un espacio contaminado, y agotado. Esta riqueza era en el pasado el fruto, podría decirse que obtenido por añadidura, de una actividad agraria cuyo fin era la explotación global de la tierra. En este sentido, la concepción patrimonial de la tierra presentaba la ventaja de conciliar el interés particular (de los agricultores) con el general (de la sociedad). Al tratar la tierra como capital inmobiliario, que sólo vale lo que rinde, la lógica productivista desconecta la actividad agraria de la misión de conservación del medio ambiente que llevaba asociada (al menos de manera implícita) en la concepción patrimonial. En otras palabras: si queremos paisajes armoniosos, tierras ricas, aguas limpias, territorios vivos, un medio ambiente viable y una naturaleza variada, hemos de producirlos, es decir, hacer de esta aspiración el objetivo de una política voluntaria y debatida públicamente. Esta perspectiva abre una extensa canteira a los agricultores y a todos aquellos que quieran ejercer oficios relacionados con los espacios abiertos.

Si la primera categoría de bienes inmateriales producidos por los agricultores quedará cada vez más en manos del mercado, la segunda exigirá durante mucho tiempo una retribución pública en correspondencia con la creación de una riqueza colectiva o pública. Crear y mantener un patrimonio intergeneracional, renovar una identidad colectiva ilustrada por estos paisajes, garantizar la calidad de la vida cotidiana, son misiones de interés general cuya financiación incumbe a la colectividad. Contribuir y vivir este objetivo disminuiría el nivel social de los agricultores, sobre todo si se tiene en cuenta que las riquezas producidas son, por excelencia, no deslocalizables.

El mundo agrario sólo afrontará las dificultades que lo amenazan aprovechando las nuevas perspectivas que se le ofrecen; es decir, negándose a atrincherarse en la única misión de producir materias primas alimentarias. En el horizonte se perfila otra forma de ejercer el oficio de agricultor. Para superar el modelo técnico-contable del agricultor actual, no se exige a la nueva generación que reinvente al campesino de ayer, sino que invente un oficio de síntesis, un oficio con metas a corto y a largo plazo, un oficio de mercado y de territorio. Ni sólo gestor, ni sólo técnico, ni sólo horticultor, ni sólo animador, sino, probablemente, todo ello a la vez.

Esta redefinición obliga a encuadrar de nuevo la relación que el mundo agrario mantiene con el Estado. Más que un contrato político entre la agricultura y la nación, habría que imaginar un contrato firmado entre cada uno de los agricultores del mañana y el poder público. Un contrato individualizado acompañado de un pliego de condiciones que recoja los derechos y deberes de cada parte. Ha llegado la hora de abandonar esta comedia anticidadana que consiste, para los agricultores, en llorar por su condición de beneficiados cuando el Estado compensa y en gritar a favor del abandono cuando no lo hace. Dado que la agricultura es necesariamente un asunto de Estado y, por tanto, un asunto de todos, es la relación entre el agricultor y los poderes públicos lo que hay que modernizar. Al orientar expresamente el dinero público hacia la conservación y mejora del territorio, el medio ambiente, el agua y el paisaje, se evitará mantener una agricultura definitivamente dual: por un lado, una agricultura exportadora que acapara el dinero público, ayer en forma de devolución por exportación

(en función de la diferencia entre el precio garantizado y el precio en el mercado mundial), hoy en forma de compensación y mañana de reparación de daños causados al medio ambiente; por otro lado, una agricultura fragilizada en los mercados, que ocupa el espacio y que reclama la solidaridad nacional para evitar su completo empobrecimiento. Colocar de nuevo las exigencias de equilibrio territorial y gestión del medio ambiente y el paisaje en el centro de la definición de la intervención pública es rechazar este dualismo en beneficio de la diversidad de la agricultura y los agricultores. Es inventar una nueva misión para la agricultura, al menos tan movilizadora como la misión alimentaria que se impuso después de la Segunda Guerra Mundial. □

RESUMEN

El artículo comienza analizando el éxito de la modernización agraria en Francia, reflejado en un aumento espectacular de la productividad y del saldo favorable de la balanza comercial agraria de dicho país. Los siguientes apartados se dedican a analizar las consecuencias de este intenso proceso de modernización con especial referencia a las principales transformaciones estructurales. Destaca en dicho análisis la disminución de la población activa agraria hasta el punto de que las entradas naturales al sector (sucesiones) no son suficientes para cubrir las salidas (abandono y jubilación), el cambio de la naturaleza y concepción de la tierra que pasa de ser considerada como el patrimonio familiar a un capital inmovilizado al que se le exige rentabilidad, la pérdida de calidad de los alimentos llegando incluso a provocar serios riesgos para la salud pública, y por último graves problemas de desarticulación territorial. El artículo profundiza en la necesidad de que la intervención pública en el sector agrario se haga desde una perspectiva de integración territorial, y termina planteando los principios básicos que deberían presidir la agricultura del tercer milenio.

PALABRAS CLAVE: Política de integración territorial, PAC, agricultura.

SUMMARY

This paper starts by analysing the success of agricultural modernisation in France, reflected in a great increase in productivity and the country's positive agricultural trade balance. The following sections are devoted to studying the consequences of this intensive process of modernisation, especially with regard to major structural changes. The main points of the above study include the decline of the agricultural working population to the point that the number of people entering the sector (successions) are not sufficient to cover the number leaving it (abandonment and retirement), the change in the character and conception of the land, which is now considered as a fixed asset expected to generate profit, rather than family property, the decline in food quality even leading to serious public health risks, and finally serious problems of regional disintegration. The paper goes into detail over the need for public intervention in the agricultural sector to be conducted from the viewpoint of regional integration and concludes by setting out the basic principles that should govern agriculture in the third millennium.

KEYWORDS: Regional integration policy, CAP, agriculture.

